

Sección internacional

ESPAÑA

Algunos aspectos de la evolución económica contemporánea

El 19 de noviembre último, tras una larga agonía que superó todas las previsiones médicas, el Jefe del Estado español murió a la edad de 82 años.

Francisco Franco, quien dirigió el destino de España por más de 36 años, ha sido considerado como el “Jefe de Estado más controvertido del siglo XX”. Ejerció con crueldad extrema un poder omnímodo desde los primeros meses de la sedición militar fascista contra el legítimo Gobierno republicano. “El Caudi-

llo” se convirtió en el gobernante español que más tiempo ha detentado el poder. Según los historiadores, sólo Felipe IV, en el siglo XVII, permaneció más tiempo al frente del Estado español, abarcando su reinado un lapso de 44 años, de 1621 a 1665.

Según la Ley de Sucesión, promulgada por el mismo Franco el 22 de julio de 1969, a Juan Carlos de Borbón corresponde el título de rey de España, desconociendo a Juan de Borbón —padre de aquél— quien es el legítimo heredero de la corona en la línea monárquica.

Así, el 22 de noviembre de este año, Juan Carlos I, en una breve ceremonia, juró como rey. En su discurso inicial precisó que era necesario contar con las “distintas opiniones” para construir un “orden justo, un orden donde tanto la actividad pública como privada se hallen bajo la salvaguardia jurisdiccional”.

“Que nadie tema que su causa será

olvidada. Que nadie espere una ventaja o un privilegio. Juntos podemos hacerlo todo, si a todos damos su justa oportunidad. El servicio del pueblo es el fin que justifica toda mi acción”, indicó. En opinión de los politólogos oficiales, tales palabras significaron una definición de la apertura política y del proceso de democratización que se propone desarrollar Juan Carlos I en las etapas iniciales de su reinado.

No obstante, está por verse si verdaderamente se trata de un cambio en la política española y si el monarca logra sacudirse la influencia de los “incondicionales de Franco”, es decir, de los sectores ortodoxos de la ultraderecha franquista, denominada “Bunker”. En este sentido, cabe recordar que la policía intensificó la represión durante las últimas semanas, incrementando dramáticamente los arrestos de líderes y personalidades de izquierda. Algunas fuentes afirman que durante esta etapa más de 7 000 personas fueron detenidas.

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del *Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.*, sino en los casos en que así se manifieste.

La España actual —marcada a sangre y fuego por la impronta del franquismo— cuenta con una población estimada de 35.5 millones de personas, que crece a una tasa anual de 1.1%. La población activa es de 13.3 millones de personas, es decir, 38% de la población total. Su estructura laboral la caracteriza como una sociedad industrial media: el 23% de la población activa depende de la agricultura, el 38% de la industria y el 39% de los servicios.

Por otra parte, según la OCDE, el país alcanzó en 1974 un ingreso *per capita* de 2 100 dólares y tuvo una tasa de crecimiento real de 5% respecto al año anterior. Desde el fin de la guerra civil, el avance de la economía ha sido muy rápido. Si hacia 1940, el ingreso *per capita* era de alrededor de 230 dólares, para 1950 ya superaba los 500 dólares y en 1970 se acercaba a los 1 000. En el período 1958-1970 el producto nacional bruto creció en términos reales a una tasa anual media de 8% y la renta *per capita* a casi 7%. Si en 1940 la inversión bruta fija representaba el 10.9%, en 1970 alcanzaba ya el 23.5% del producto. La participación de las manufacturas en el producto nacional era de 20% en 1940 y de casi 31% en 1970; en cambio, la de la agricultura, superior a un tercio en 1940, descendió hasta el 13% en 1970.

Por otro lado, España tiene ya una estructura industrial diversificada que le permite sustituir en gran medida las importaciones de bienes intermedios y de capital, hasta casi la autosuficiencia. El comercio exterior se ha desarrollado mucho. En este sentido, mientras que en 1940 las exportaciones alcanzaron apenas 129 millones de dólares, en 1970 ya se elevaban a 2 388 millones y en 1974 llegaron a 7 300 millones. En contrapartida, las importaciones evolucionaron mucho más rápidamente. En 1940 eran de 203 millones de dólares, en 1970 alcanzaron los 4 747 millones y en 1974 sumaron 14 300 millones de dólares. Los ingresos por turismo han adquirido cada vez mayor importancia como elementos de atenuación del déficit en cuenta corriente. En 1953 esas entradas representaron 92 millones de dólares; en 1964 pasaron de 900 millones; en 1970 fueron de 1 681 millones y en 1974 llegaron a 3 000 millones. En este último año visitaron España 30.3 millones de turistas.

La muerte de Franco no es en verdad más que otra etapa de la aguda crisis del franquismo y de su concepción fascista del mundo, cada vez en mayor contradicción con la realidad contemporánea, no sólo española, sino europea e incluso de todo el planeta. Esa descomposición del franquismo se ha dado en los últimos tiempos —según observan los analistas— en el marco de las repercusiones de la crisis económica internacional en España y de la persistencia de ciertas características estructurales internas en lo socioeconómico y lo político que se oponen a los cambios en favor de un desarrollo más equilibrado y más justo. Para comprender estos problemas quizá sea necesario recordar a grandes rasgos la evolución española desde los tiempos de la República.

El quinquenio republicano (1931-1936) nació marcado por la gran depresión económica internacional, cuyo arranque cronológico se sitúa en noviembre de 1929. Consecuencia de la crisis capitalista fue la progresiva degradación del comercio mundial, a la que se sumaron la sucesiva aceleración de las políticas restrictivas en la mayoría de los países, la disminución brusca en la producción de los artículos de primera necesidad y el despido masivo de trabajadores. El paro, el hambre, las huelgas, los movimientos revolucionarios y las represiones se extendieron por doquier. En algunos países, en los que las instituciones democráticas habían alcanzado un alto grado de desarrollo, las consecuencias políticas no fueron sustanciales; en cambio, en donde estas instituciones no se habían desarrollado, como en Alemania, Italia y Portugal, la crisis económica culminó con importantes transformaciones políticas, cuyas consecuencias habría de pagar la humanidad entera pocos años después, en el holocausto de la segunda guerra mundial. Nacieron así los regímenes nacionalsocialista, en Alemania, fascista en Italia y corporativista en Portugal.

La España de 1931 tenía una situación bien distinta de la del resto de los países europeos; las instituciones democráticas apenas comenzaban a desarrollarse, impulsadas por el anhelo de derribar a la sangrienta dictadura que ejerció Primo de Rivera durante el reinado de Alfonso XIII. Desde 1929 el país vivía en un permanente estado de agitación, lo que junto con los efectos del colapso económico internacional, provocó la caí-

da de Primo de Rivera. En estas condiciones, fueron muy pocos los que se plantearon la posibilidad de aplicar un régimen de fuerza para encontrar una salida nacional a la crisis mundial. Por el contrario, la reacción primera fue en favor de la democratización de España, instaurando un régimen republicano.

Así, el 14 de abril de 1931, después de unas elecciones municipales, convocadas por Alfonso XIII, y que se suponían de mero trámite para los candidatos monárquicos pero que por sus resultados abrumadoramente adversos para ellos adquirieron el carácter de verdadero plebiscito contra la monarquía, fue proclamada la Segunda República. Con ello hubo un rápido florecimiento de las instituciones democráticas y la mayoría de los españoles se incorporaron a la discusión de los grandes problemas nacionales. Ante la gravedad de los problemas sociales y políticos, ventilados entonces sin cortapisas, se llegó a un estado de radicalización de las mayorías y de paralización inicial de los grupos oligárquicos.

Sin entrar en el fondo de la cuestión, vale la pena detenerse brevemente en los principales rasgos de la evolución socioeconómica durante el período 1931-1936, que comenzó a transformar la estructura de la economía española de fundamentalmente agraria a agrario-industrial, con un peso cada vez mayor de las actividades secundarias.

En términos generales, la actividad económica durante el período 1931-1936 logró mantener, en valores absolutos, el mismo nivel de ingreso de 1929 —el más alto que había conocido España hasta entonces—, con la excepción de 1933, que fue el año de mayor agudización en la crisis mundial y española. La renta en términos *per capita* descendió en casi 6% anual en promedio, aunque este descenso, a pesar de su gravedad, fue atemperado por la mejora en la estructura de la distribución del ingreso a través de las alzas salariales.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 1931 la población española alcanzaba un poco más de los 23.5 millones; la económicamente activa representaba el 35.5% de la total, distribuyéndose por sectores como sigue: 45.5% en la agricultura, 26.5% en la industria y 28% en los servicios.

Al establecerse el Gobierno republica-

no, la economía española era relativamente cerrada. A pesar de la difícil situación producida por la crisis mundial, se logró un notable ritmo de crecimiento de la producción industrial, que —excepto en 1933— persistió hasta 1935, cuando debido al recelo de la burguesía respecto a la actitud política y social asumida por la joven República, se frenó la inversión privada. Sin embargo, pese a esta situación y a la caída de la economía en 1933, España logró recuperar en 1935 el nivel de actividad de 1929, sin acudir a medidas de fuerza, en oposición a la actitud de los sectores conservadores que, desde 1932, pretendían implantar un orden público férreo para superar la crisis económica.

Además de estos problemas, de por sí urgentes, la República española hubo de enfrentarse a otros, de carácter estructural. Destaca entre ellos la cuestión agraria, que ha sido tradicionalmente importante en España, al grado de que de ella han nacido serios desequilibrios económicos y políticos, cuyas repercusiones han dado pie históricamente para mutaciones políticas de considerable magnitud. Por ello, los sucesivos gobiernos republicanos dedicaron grandes esfuerzos al sector agrícola.

La agricultura española en 1931 puede caracterizarse de la siguiente manera: una fuerte concentración latifundista, donde se cobijaban muchos vestigios feudales, al tiempo que existían numerosas explotaciones minifundistas. Los latifundios mayores estaban en manos de la "grandeza española", que salvo en casos muy especiales, bien poco se ocupaba de sus propiedades. En 1931, los 99 grandes latifundistas españoles poseían 577 359 ha. Ello significaba una extensión promedio de un poco más de 5 800 hectáreas por cada gran propietario; sin embargo, los 10 principales (los "Grandes de España") tenían propiedades muy superiores a esa superficie, de poco más de 30 000 hectáreas en promedio. Entre esos grandes terratenientes destacaban el Duque de Medinaceli, cuyas propiedades tenían una extensión que sobrepasaba las 79 000 hectáreas, el de Peñaranda, con 51 000, el de Vistahermosa, con 47 200, y el Duque de Alba con casi 34 500 hectáreas.

En el otro extremo, casi dos millones de campesinos eran jornaleros agrícolas o "yunteros", es decir, sin tierra, pero con yuntas u otro medio de labranza, y

1 900 000 eran pequeños agricultores, con explotaciones tan reducidas que tenían que dedicar buena parte de su tiempo a trabajar como asalariados, para sostener a su familia. Entre la población rural existía, además, un elevado índice de analfabetismo, cuyas repercusiones sociales eran de extremada magnitud.

Junto a los problemas estructurales, otros de carácter coyuntural incidieron en el sector rural. A fines de 1930, a la sombra de la recesión económica, muchos obreros de origen campesino volvieron a sus tierras. La corriente migratoria de la ciudad al campo alimentó la presión demográfica y abonó la desesperación de gran parte del campesinado.

Para solucionar esta tensa situación, el Gobierno republicano expidió el 15 de abril de 1931 una declaración en que se establecía su compromiso con los campesinos. En este documento se manifestaba "el reconocimiento de que el derecho agrario debe responder a la función social de la tierra". Sin embargo, a pesar de admitir la situación lacerante que existía en el campo, el Gobierno estuvo incapacitado para elaborar un programa de acción que le permitiera poner en marcha, durante los primeros meses, la tan urgente reforma agraria.

Entre 1931 y 1936 los sucesivos gobiernos republicanos instrumentaron políticas a corto y a largo plazo sobre la cuestión rural. Sin embargo, debido a que los gobiernos de la República siempre estuvieron constituidos por una coalición de fuerzas bien diferentes, incluso antagónicas, la aplicación de tales instrumentos fue constantemente obstaculizada.

No obstante la marcada división existente en el gobierno, la República llevó a cabo la reforma agraria, repartiendo —hasta marzo de 1938— un total de 5.7 millones de hectáreas para su explotación individual o colectiva entre los campesinos.

Además del reparto de tierra y el asentamiento de los campesinos, la reforma agraria contempló otros aspectos que, aunque menos significativos, no dejaron de tener importancia, tales como las obras de riego y la conservación forestal.

Según afirman los estudiosos, el panorama de la producción agrícola, salvo

para ciertos productos destinados a la exportación, fue excelente durante el quinquenio en cuanto a los montos producidos y la productividad, pese a que durante esos años la agitación campesina fue de gran magnitud.

Por su parte, el comercio exterior durante el mismo lapso sufrió particularmente la situación que imperaba en el escenario internacional. Los productos agrícolas tradicionalmente exportados por España tuvieron serias dificultades; incluso, muchos mercados fueron cerrados mediante prohibiciones y severas medidas restrictivas. A este panorama se agregaron los efectos de las situaciones preferenciales y la creación de las llamadas "preferencias imperiales", que coadyuvaron a cerrar el mercado inglés, el más importante del comercio exterior español.

Según las estadísticas oficiales, la cantidad exportada descendió a 55.2 en 1935, tomando como año base 1929; en cuanto al valor de las exportaciones, el índice bajó hasta 27.8 en el año mencionado.

A la vez que las transformaciones económicas, la segunda República alentó las sociales. En términos generales, las transformaciones sociales inspiradas por los republicanos abarcaron tanto aspectos laborales, tales como mejorar las condiciones de contratación, respetar el derecho de huelga, e instaurar la seguridad social y el seguro contra el paro, cuanto los aspectos educativos y culturales.

En materia laboral, los avances logrados por los trabajadores españoles fueron muy grandes, hasta el punto de que incluso los especialistas más fieles al franquismo han reconocido que aquel fue un período de expansión en lo relativo a la protección social.

En cuanto a los aspectos educacionales y culturales, en 1931 el índice de analfabetismo abarcaba entre 30 y 40 por ciento de la población, siendo aún más elevado entre la población infantil, en la cual según recientes estimaciones, casi el 50% carecía de escolaridad efectiva.

Durante los dos primeros años de la República, el Ministerio de Instrucción Pública construyó 13 570 escuelas, y atendió otros aspectos educativos, lo que

permitió reducir drásticamente el problema del analfabetismo. Baste destacar, a falta de datos más completos, que la población escolar en el bachillerato pasó de casi 71 000 alumnos en el año académico 1929-30, a 124 000 en el período 1934-35. Con todo, las metas propuestas por el Gobierno republicano aún estaban muy lejanas, tanto en la estructura educativa como en el cumplimiento del programa contra el analfabetismo.

En el marco político, los gobernantes republicanos establecieron importantes cambios, cuyo eje central fue establecido en la Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931.

Entre los principales problemas políticos que tuvieron que encarar los españoles durante el quinquenio republicano se encuentran: la separación Iglesia-Estado y la implantación oficial del laicismo, que contribuyó en buena medida a crear en el clero una actitud favorable para el levantamiento antirrepublicano. Otro problema decisivo para la suerte de la República fue el aspecto militar. La reorganización del ejército impulsada por el Gobierno de Azaña en 1931 y que comprendía la reducción de los efectivos a la mitad y un programa de retiro de generales y de la mayor parte de la oficialidad. Al mismo tiempo, se preveía la "republicanización" del ejército, con lo que los grupos hegemónicos perdían toda posibilidad de subvertir el orden.

Un tercer problema, quizá de mayor importancia, que los anteriores, tanto por las tensiones surgidas durante su discusión, como por sus repercusiones, al contribuir en el amalgamamiento de las fuerzas de la derecha política y en la politización del ejército, fue el reconocimiento de las aspiraciones de autonomía regional, cuyo origen se remonta al siglo XV, época en la que, después de ocho siglos de lucha contra el reino islámico, se creó la unidad de todos los reinos que formaban España. Hay que señalar que el desarrollo histórico, económico, político y cultural de cada región era acusadamente distinto. Galicia, Aragón, Valencia, Cataluña, Baleares, Navarra y el País Vasco fueron integrados poco a poco en un proceso que finalizó a mediados del siglo XIX, conforme se iba desarrollando el mercado nacional español y se centralizaba la economía. Durante estos siglos aparecieron muchos proyectos de separatismo, regionalismo, nacionalismo, etc., cuya vida fue efímera

frustrándose siempre las aspiraciones de estas minorías nacionales.

En estas condiciones, el insoslayable problema del regionalismo fue tratado con todo empeño por los políticos de la Segunda República. Entre 1931 y 1936 sucesivamente fueron elaborados los estatutos de las autonomías regionales, aunque sólo dos de ellos llegaron a promulgarse: el catalán, el 15 de junio de 1932, y el de Euzkadi el 1 de octubre de 1936. En estos estatutos se reconocía la soberanía regional y el derecho a la autodeterminación.

Sin embargo, al mismo tiempo que la República avanzaba en la solución de los problemas expuestos, los partidarios de la hegemonía de los pocos y de la pervivencia de los privilegios se preparaban para derrocarla mediante una conspiración bien estructurada que venía gestándose desde 1932. La conjura, a la que el Gobierno prestó poca atención, tomó fuerza en las últimas semanas de junio y las primeras de julio de 1936, produciéndose el alzamiento del 18 de julio, con lo que dio principio la guerra civil. El apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista fue determinante en la derrota republicana, junto con la actuación del llamado Comité de no Intervención. Al finalizar la terrible guerra, en abril de 1939, el régimen fascista de Francisco Franco dominó toda España. El país estaba en situación desoladora. Aunque los historiadores y tratadistas no han llegado a un acuerdo sobre las consecuencias de la guerra, existen algunos datos que, sin pretender ser completos, arrojan luz sobre la destrucción causada por el conflicto bélico. Según estos análisis, además de un millón de muertos y más de 350 000 españoles en el exilio, los daños materiales fueron: 192 ciudades devastadas, entre las que destacan Madrid, Barcelona, y Málaga; centenares de pueblos arrasados, como Brunete y Guernica; más de medio millón de casas destruidas o semidestruidas; el 75% de los puentes inutilizados; el sistema ferroviario semidestruido y la producción agrícola reducida en un 30% con relación a los niveles alcanzados en 1935. En Asturias y en Bilbao, en donde las minas y las industrias prácticamente no sufrieron destrucción alguna, la producción se redujo a la mitad de la cifra registrada en 1929. La población económicamente activa se redujo en cerca de 800 000 hombres. La repercusión en el ingreso nacional fue de tal magnitud que

ese indicador descendió por debajo del nivel alcanzado en 1900.

El hambre campeaba en los pueblos y en las ciudades. Los productos de primera necesidad, como el pan, la carne, las papas, el aceite, el café y el azúcar fueron racionados, al tiempo que el mercado negro --el "estraperlo" se desarrolló solapado por las autoridades falangistas, siendo el origen de no pocas de las actuales fortunas españolas. En un poema escrito en la cárcel, Miguel Hernández dio cuenta del estado de cosas imperante en la España de la posguerra:

"En la cuna del hambre/
mi niño estaba/
con sangre de cebolla/
se amantaba./
Pero tu sangre,/ escarchada de
azúcar/
cebolla y hambre./
Una mujer morena,
resuelta en luna/
se derrama hilo a hilo/
sobre la cuna."

En lo político, fue destruida la vida democrática que había caracterizado al período republicano. Los partidos políticos fueron puestos fuera de la ley, al igual que los sindicatos. Los estatutos de autonomía fueron revertidos, apoyándose en un pensamiento de Calvo Sotelo: "España Roja, España Rota". El Gobierno franquista puso fin a los justificados anhelos de autonomía de las minorías nacionales. La ley de reforma agraria fue suspendida, los derechos laborales cancelados. En fin, el franquismo hizo retroceder a España más de 100 años en la historia, según opinan calificados estudios y analistas de nota.

En lo económico, la política seguida por el Estado franquista desde el término de la guerra civil se divide en cinco etapas bien definidas: la primera, de 1939 a 1951, que comprende el período autarquizante; la segunda, de 1952 a 1956, en la que prevalecieron los criterios de liberación económica exigidos por la ayuda norteamericana; la tercera de 1957 a 1958, en que dominaron los criterios privatistas propios de los equipos tecnocráticos influyentes en el gobierno; la cuarta, cuyo origen se encuentra en el Plan de Estabilización de 1959 para equilibrar el desarrollo de España y la quinta, que comprende el período de la planificación indicativa.

La primera fase duró 12 años. En esta etapa, el Estado - inspirado en los regímenes de Hitler y Mussolini - impulsó una política económica tendiente a alcanzar una amplia autosuficiencia agrícola e industrial frente al exterior. Empero, dio prioridad al sector industrial, relegando a un segundo plano a los demás, lo que contribuyó a engendrar a

la postre mayores problemas económicos y sociales.

En esta etapa, denominada por los especialistas "de autarquía", el Gobierno dio marcha atrás a la política de reforma agraria del período republicano y restituyó en poco tiempo la estructura de la propiedad prevaleciente antes de 1931. La reversión de la reforma agraria fue realizada sobre la base de criterios de orden técnico, en los que predominaba la posibilidad de utilizar los avances de la tecnología en la explotación agrícola, aunque ello significara el abandono de los aspectos sociales de la población rural y de la redistribución de tierras.

Tal como señalan los tratadistas, los resultados no coincidieron con los proyectos, al menos en lo que respecta a la autosuficiencia de productos agrícolas y a la tecnificación de la producción. Durante estos años, el Gobierno español acudió sistemáticamente a la importación de cereales y otros productos para abastecer el mercado interno. Al mismo tiempo, se inició un rápido proceso de descapitalización del campo, ya que los capitales emigraban a la industria en busca de beneficios más altos.

En lo que sí dio resultado fue en la reversión de la estructura de la propiedad, en donde resurgió el binomio latifundio-minifundio. En efecto, la contramarcha de la reforma agraria engendró una acusada tendencia a la concentración de la tierra, al tiempo que, en el otro extremo, se desarrollaba con celeridad la tendencia a la atomización de la propiedad.

Según recientes estimaciones, del total de 50 millones de hectáreas a que asciende la extensión total de España, sólo el 41% son tierras de cultivo; de ellas, casi el 50% están ocupadas por el 1.5% de las explotaciones, mientras que más de la mitad del número de parcelas de menos de una hectárea ocupa únicamente el 6% de la superficie agrícola total. Las empresas medianas, cuya superficie varía entre 50 y 200 hectáreas, representan algo menos del 4% de las explotaciones y ocupan alrededor del 18% de la superficie. El resto está fraccionado en extensiones de 1 a 5 hectáreas, que se explotan en forma familiar, cuando no son abandonadas por los campesinos que emigran a las ciudades en busca de un trabajo remunerado y un futuro para sus hijos.

El éxodo rural es uno de los proble-

mas más importantes que afectan al agro español. Según algunas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Industrias (INI), el descenso de la población agraria ha ido en constante aumento desde 1954, agudizándose entre 1970 y 1973, años en que se registró un ritmo absoluto del orden de 90 000 personas anuales, lo que ha hecho que la población activa agraria se sitúe en torno al 21% del total nacional, mientras que en 1970 dicha participación alcanzaba el 28%. Además, las migraciones han afectado particularmente a los grupos de edades más activos, con la consiguiente aceleración en el proceso de envejecimiento de la población que permanece para trabajar en los campos. Cabe señalar que para 1972 más de la mitad de la población activa agraria superaba ya los 45 años de edad.

Otro de los grandes problemas que tradicionalmente ha registrado el sector agrícola español es el de la baja mecanización. En 1956 había en España un tractor por cada 605 hectáreas, mientras que en Francia —que a la sazón no presentaba un elevado índice de mecanización agrícola— había uno por cada 50 hectáreas.

A partir de 1960, la existencia de tractores ha crecido considerablemente en España. En 1966 había 172 000, frente a 58 000 en 1960. En 1973 se registraron 330 722 tractores. Empero, según la OCDE, la mecanización agrícola continúa siendo menor que la media europea.

En contraste con el retroceso relativo del sector agrícola el desarrollo industrial ha llamado la atención de no pocos estudiosos, en gran parte debido al explosivo crecimiento que registró en la década de los años 60. Incluso algunos observadores llegaron a considerar al "milagro español", como un sucedáneo del alemán y del japonés. Vale la pena detenerse brevemente para señalar los principios básicos que rigieron el crecimiento industrial de España en las últimas épocas.

Al concluir la guerra civil, el Estado franquista heredó un sector industrial relativamente desarrollado, gracias a la política de fomento industrial del período anterior. En la primera etapa de la industrialización española de posguerra, el Estado fortaleció la política de fomento, con el objetivo ya mencionado de alcanzar un alto grado de autarquía

económica y elevar las condiciones de la defensa nacional, mejorando las industrias de guerra y las de materias primas para ellas. A fin de alcanzar este objetivo, el Gobierno impulsó la alianza con el capital alemán. Según algunos estudios, las primeras fábricas que se abrieron fueron las de material bélico, siendo las obreras españolas las encargadas de confeccionar los paracaídas para la Fuerza Aérea alemana, así como el llenado de casquillos para las ametralladoras del ejército nazi.

La política industrial que rigió entre 1939 y 1951 estuvo marcada básicamente por el criterio proteccionista, cuya expresión legal fueron las dos leyes industriales promulgadas en 1939. Ambas leyes concedían importantes beneficios fiscales, crediticios, y otros estímulos, al tiempo que establecían un fuerte control estatal para la autorización de nuevas industrias y para la distribución de las materias primas, muy escasas en España debido a la política restrictiva que los países europeos instrumentaron durante la segunda guerra mundial. Dos años después de promulgar esas leyes, el Estado creó el Instituto Nacional de Industrias (INI), que se encargó de promover nuevas empresas en las más diversas ramas del sector. Estas empresas, una vez que alcanzaban tasas rentables, eran transferidas al sector privado.

Sin embargo, el objetivo de la autarquía se alejaba progresivamente, a medida que transcurría el tiempo, sin que se haya logrado alcanzar jamás. Las empresas creadas por el INI fueron planeadas para satisfacer las perentorias necesidades del mercado interno, muy reducido por entonces. Debido a esto, las empresas eran de dimensiones extremadamente pequeñas y rápidamente resultaron antieconómicas, sin posibilidad —por otra parte— de ser modificadas para adaptarlas a las nuevas circunstancias tecnológicas, a menos que se incurriera en un elevado costo.

Al mismo tiempo, el proyecto de reestructuración industrial se enfrentó con grandes obstáculos, como la escasez de bienes de capital y de materias primas, la baja producción de energía eléctrica, que impedía la satisfacción de las necesidades mínimas, incluso para la población.

A estos problemas, en sí fuertes, hay que agregar las fuertes inversiones públi-

cas realizadas en el marco de un presupuesto deficitario, lo que derivó en un proceso inflacionario de proporciones muy considerables que no tuvo como contrapartida una expansión de la producción industrial, como esperaban las autoridades económicas. Las consecuencias más graves del proceso inflacionario recayeron en la población asalariada. Hacia 1950, a pesar de las rígidas medidas adoptadas por el Estado, una intensa ola de agitación laboral, impulsada por la carestía de la vida y los bajos salarios, demostró que la vía autárquica estaba también agotada desde el punto de vista político. En enero de 1951 una serie de huelgas sirvió de corolario de esta primera fase y el régimen se vio en la necesidad de reorientar la política económica.

Cabe señalar que la situación política había cambiado respecto a las posiciones que mantenían la mayoría de los países frente a España. En efecto, en 1939 la opinión pública democrática mundial sostenía una posición de rechazo al Gobierno franquista, tanto por su alianza con los países del Eje nazi-fascista cuanto por los horrores desencadenados durante la guerra civil y por la represión inmisericorde contra los vencidos republicanos. Sin embargo, después de la segunda guerra mundial la situación política comenzó a cambiar. Se inició una nueva era, que se dio en llamar de la "guerra fría", con eufemismo de resonancias ominosas. Al principiar la década de los años cincuenta, el conflicto de Corea agudizó las tensiones políticas internacionales e hizo más "frío" el clima de aquella "guerra", creando una coyuntura favorable para el anticomunismo a ultranza. Franco supo aprovechar esas circunstancias para obtener pingües beneficios económicos y consolidar su gobierno en el plano mundial. Repitió hasta la saciedad su deseo de emprender una "cruzada liberadora" para rescatar a "los pueblos sometidos al comunismo ruso" y logró vencer la resistencia o las reservas de muchos países que antes lo condenaban. En este empeño resultó decisivo el espaldarazo de Estados Unidos, poderosísimo "aliado" que con sus reiterados gestos amistosos hacia Franco pareció olvidar que durante la segunda guerra mundial perecieron centenares de miles de sus ciudadanos en combate contra todas las formas del fascismo. Esta etapa culminó cuando, en 1955, la Asamblea General de la ONU aprobó por inmensa mayoría la admisión del Estado español en el organismo mundial.

Solamente dos países votaron en contra: México y Yugoslavia.

Unos años antes, en 1951, la diplomacia hispana había logrado que el Gobierno estadounidense asignara una partida crediticia del Eximbank mediante la ley de seguridad mutua del año fiscal 1950-51, destinada a la adquisición por España de productos agrícolas, materias primas y equipos industriales hasta por un valor de 62.5 millones de dólares. Al poco tiempo, el mismo banco otorgó otros dos créditos por un total de 24 millones de dólares para financiar la adquisición de fibras naturales, principalmente algodón.

A su vez, Inglaterra y Francia relajaron la política de bloqueo y otorgaron algunos préstamos, aunque de menor cuantía. Así siguió el gobierno de Franco colocándose en "el concierto de las naciones".

En 1953, a la sombra de la tirantez mundial, el Gobierno de Washington negoció con el de Madrid sobre la posibilidad de establecer bases militares en territorio español, como parte de la ampliación de su amplio dispositivo de seguridad en torno a los países del bloque socialista. Las negociaciones entre Estados Unidos y España concluyeron con la firma del Pacto de Madrid. En este documento se fijaron los montos de la ayuda económica, técnica y militar que recibiría España a cambio de ceder su territorio para que se establecieran en él cuatro bases militares estadounidenses.

La firma del Pacto de Madrid permitió reactivar el proceso de industrialización. Cabe señalar que algunos capitales estadounidenses participan desde 1948 en la economía española, principalmente los provenientes de los bancos de la familia Rockefeller.

De 1951 a 1956, la ayuda norteamericana fue de 500 millones de dólares aproximadamente. Sin embargo, debido a la situación heredada de la etapa autárquica y a los desajustes económicos derivados de ella, dicha ayuda no fue suficiente para eliminar las debilidades estructurales del crecimiento económico español. Como consecuencia, en 1956 se disparó el proceso inflacionario que culminó nuevamente en una vasta oleada de huelgas y de conflictos sociales. La difícil situación resultante condujo de nuevo a la reorganización del aparato adminis-

trativo y a una serie de cambios ministeriales.

Esta vez los cambios en el Gobierno no se limitaron a sustituir a los hombres; la ayuda prestada por el Gobierno estadounidense exigía la aplicación de una política económica más flexible y liberal, cosa que las antiguas autoridades falangistas no estaban en condiciones de realizar. En estas circunstancias, un nuevo tipo de hombre se hizo cargo de la conducción económica del Estado. Llamados los "tecnócratas", los economistas del Opus Dei adoptaron de inmediato algunas medidas estabilizadoras y devaluaron la peseta con el fin de estimular las exportaciones y frenar las importaciones. El 1 de abril de 1957 se estableció el cambio único de 42 pesetas por dólar. Sin embargo, esta medida pronto fue revocada y apareció nuevamente el cambio múltiple para defender las exportaciones de los efectos de la inflación, que no pudo ser frenada.

Entre las medidas adoptadas para estabilizar la economía española se contaron la congelación de los salarios y de los sueldos de funcionarios durante todo 1957; la elevación del tipo de descuento y el establecimiento de un tope de re-descuento en el Banco de España, para frenar el crédito especulativo; una reforma tributaria para elevar la recaudación y, por consiguiente, disminuir el déficit tradicional del sector público. Posteriormente, en 1958, se publicó el "Programa de Inversiones", que intentó conciliar el crecimiento económico y la estabilidad de los precios, utilizando los recursos realmente disponibles.

Con base en esta política estabilizadora, en 1959 el Gobierno español se dirigió al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), en donde los especialistas, después de un detenido examen de la economía española, acordaron facilitar un apoyo financiero de 546 millones de dólares. Sobre la base de la experiencia adquirida en 1957 y 1958 y las recomendaciones de los especialistas del FMI y de la OECE, las autoridades españolas elaboraron un Plan de Estabilización. Dicho Plan era un "proyecto coherente" que contaba con el apoyo del capital financiero interno y convergía con el camino de desarrollo elegido por Europa occidental.

El objetivo principal que planteaba el Plan de Estabilización fue el de sentar

las bases de un desarrollo económico equilibrado e iniciar un proceso de integración con las demás economías europeas. Fue, en ese contexto, la operación económica de mayor envergadura instrumentada por el Estado español en 20 años, cuyos resultados permitieron que el aislamiento económico fuese sustituido por un creciente intercambio con el exterior. Esta evolución hizo posible que a partir de 1959 se iniciara una poderosa corriente turística, de innegables efectos económicos positivos para España. Baste señalar que en 1960 ingresaron al país 6.1 millones de turistas y que 1973 fue el año más alto por esa entrada (34.5 millones de personas). En 1974, un brusco descenso, originado por la crisis económica europea, redujo el turismo en poco más de 11%, lo que originó serios desequilibrios en la economía ibérica.

Los efectos del Plan de Estabilización fueron alentadores, según opinaron los expertos de la OECE, ya que en relativamente poco tiempo la economía española había logrado notables éxitos en la estabilización de los precios. La inflación había dejado de ser, al menos temporalmente, una amenaza para el crecimiento económico. Sin embargo, la contención del proceso inflacionario redujo la actividad económica, sobre todo en los sectores más débiles, entre los que se encontraban la minería del carbón, la industria de la construcción de maquinaria y las ramas textil y papelera. Esta contracción económica se reflejó de inmediato en el mercado de trabajo, en el que aumentó considerablemente el número de parados, al tiempo que fueron reducidas, casi hasta su desaparición, las remuneraciones complementarias del salario (horas extras, etcétera).

Para 1961, a un cuarto de siglo del "Alzamiento", las transformaciones económicas agrietaban las viejas estructuras de España, para dar paso a nuevos derroteros. El despegue de la expansión industrial comenzó al concluir el Plan de Estabilización y la sociedad española pronto se vio envuelta en el vértigo del consumo.

En efecto, a mediados de 1961, una misión del Banco Mundial visitó España invitada por el Gobierno. Esta delegación redactó un informe en el que se detallaban las posibilidades del desarrollo económico del país. Este documento serviría, poco tiempo después, para elaborar el I Plan de Desarrollo, aplicado a

partir de 1962. Así, España entró en la llamada "planificación indicativa".

Durante esta etapa, las autoridades económicas han preparado tres planes de desarrollo para atender las necesidades generadas entre 1962 y 1975. Esquemáticamente, éste es el contenido de dichos instrumentos de planeación:

- El I Plan de Desarrollo (1964-1967) intentó ser un plan global, con el propósito de potenciar los recursos de la economía española, apoyándose en los logros del Plan de Estabilización de 1959. En palabras del subsecretario de Economía Financiera, el I Plan "quiso significar la alternativa a la improvisación con vistas a estimular el progreso del país".

Si bien puede decirse que tuvo éxito (el PIB creció a un ritmo de 6% anual), los acontecimientos de 1967 —especialmente la devaluación de la peseta y las desviaciones habidas en muchos subsectores, producto de la propia situación económica, castigada por una inflación intensa y el cumplimiento del sector público— ocasionaron un retraso en la elaboración del II Plan.

- El II Plan de Desarrollo (1968-1971) dio atención preferente a los problemas agrícolas y educativos. Sus resultados fueron un poco menores que los registrados anteriormente; el PIB tuvo un ritmo de crecimiento de 5.5% anual.

En opinión de los analistas, en el II Plan predominaban tres características importantes: en primer lugar, una mayor atención a la estabilidad; en segundo, la dimensión social y en tercer lugar, su proyección para integrar a España con el exterior.

- El III Plan de Desarrollo, que cubre los años 1972 a 1975, ha sido considerado como el más ambicioso de los tres. Se planteó como meta alcanzar un ritmo de crecimiento económico de 7% anual en términos reales para todo el período. Sin embargo, no ha sido alcanzada salvo en el lapso 1972-1973, en el que el PIB creció 7.9%, mientras que en 1974 la cifra fue de 4.6 por ciento.

Para 1975, el Gobierno tenía previsto un crecimiento en el PNB de 2.5%, que en términos históricos recientes resulta sumamente baja. Sin embargo, según al-

gunos datos publicados, el crecimiento económico de España durante el primer semestre de 1975 quedó reducido a 0.7%, lo que significa una tasa negativa *per capita*.

Para los observadores, este notable descenso de la economía se debe a acontecimientos externos e internos. Entre los primeros se considera que la crisis económica occidental ha influido muy seriamente en España, tanto por los problemas derivados de las restricciones comerciales como por el progresivo aumento de los precios de los energéticos y de las materias primas derivadas del petróleo. También ha influido en el descenso del número de turistas que visitan España y en el regreso de los trabajadores emigrados, cuyas remesas constituían un rubro muy importante en la economía española.

Por otra parte, la vuelta de los trabajadores emigrados incidirá en el aumento de la tasa de desempleo interno, que a últimas fechas se ha intensificado debido al cierre de no pocas empresas. En términos absolutos, según las cifras del Ministerio de Trabajo, en el mes de junio último había cerca de 310 000 personas desempleadas. Empero, tal estimación no tomó en cuenta a los trabajadores que ingresaban por primera vez al mercado de trabajo, a las mujeres y a los profesionales. Englobando estos rubros, algunos analistas afirman que para junio el paro obligatorio afectaba a casi 750 000 personas.

Al analizar este problema, la revista económica *Dobión*, publicada en Barcelona, señala que "en España faltan tres millones de puestos de trabajo..." y estima que para finales de año se alcanzará la alarmante cifra de un millón de parados, equivalente a 7.5% de la población activa.

Por otra parte, el descenso del ritmo de la producción industrial, que comenzó en la primavera de 1974, se agudizó en los primeros meses de 1975, alcanzando en mayo un descenso de 9.1% en relación con el mismo mes del año anterior. Según las estimaciones de algunos observadores, la producción industrial ha retrocedido al nivel que tenía en 1973.

A estos problemas hay que agregar el fuerte proceso inflacionario que, según recientes estimaciones, puede alcanzar en 1975 una tasa cercana al 20%, y de

seguir esta tendencia, en 1976 alcanzará un ritmo de 20 a 25 por ciento.

Al evaluar la situación económica por la que atraviesa España, el ministro de Hacienda, Rafael Cabello de Alba, declaró en los últimos días de septiembre: "Vivimos tiempos económicos difíciles, pero los problemas no son tan graves como los pesimistas quieren hacernos creer, ni son insolubles". Por su parte, el ministro de Industria, señor Alvarez Miranda, indicó que éste es un "momento económicamente complicado, que exige de todos serenidad y serias reflexiones".

La difícil situación de la economía española en la actualidad, que reconocen los responsables de la política económica, no es quizá lo determinante en el panorama más amplio de la vida española en su conjunto. Muchos especialistas han señalado que la solución de la crisis económica se encuentra en la superación de la crisis política y social. Un destacado académico y economista español para sólo mencionar un ejemplo considera que "la crisis económica es resultado de la política", que se ha agudizado a partir del pasado verano, cuando se promulgó el decreto de excepción y se recrudecieron las medidas represivas. En este sentido se afirma: la ruptura del círculo vicioso (la crisis económica es en gran medida resultado de la crisis política; y la crisis política acentúa la crisis económica) no puede venir sino de un cambio político que abra una nueva etapa en la vida de todos los españoles.

ASUNTOS GENERALES

Trigésima Reunión Anual de las Juntas de Gobernadores del FMI y del Banco Mundial

Con profundas divisiones entre los países industrializados, el reconocimiento de escasas esperanzas de mejoramiento para los países pobres en lo que resta de la presente década y un alud de demandas de comercio justo, asistencia económica y financiamiento para quienes sufren los efectos del desorden económico internacional, se celebró los primeros días de septiembre último, en la ciudad de Washington, D.C., la Trigésima Reunión Anual de las Juntas de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo del Banco Mundial. Asistieron más de tres mil delegados, observadores

e invitados especiales de ciento veintisiete países.

Las deliberaciones se celebraron después de conocerse el sombrío panorama expuesto en los informes anuales del Banco Mundial por su presidente, Robert McNamara, y del FMI, por su director general, Johannes Witteveen.

Entre los principales temas discutidos figuró la desaceleración del crecimiento económico del mundo industrializado en 1974-1975, que al convertirse en recesión ocasionó graves desequilibrios en las transacciones internacionales de los países exportadores de productos primarios. Asimismo se subrayó la urgente necesidad de reducir las grandes disparidades en la distribución de la riqueza mundial, buscar los medios para controlar las excesivas fluctuaciones en los precios de las materias primas y asegurar un aumento constante y sostenido del comercio mundial.

Al hacer referencia al comportamiento de la economía del mundo capitalista, el Presidente del Banco Mundial señaló a los países desarrollados como principales responsables de la crisis financiera. McNamara rechazó la idea de que los nuevos precios del petróleo sea una de las causas decisivas del actual desajuste financiero y señaló en cambio que la prosperidad sin precedente de los años 1972-1973 intensificó la demanda a tal nivel que la capacidad de producción disponible no pudo satisfacerla, estimulándose con ello un aumento desmesurado en los precios. Para detener la espiral inflacionaria, los países desarrollados comenzaron a aplicar una serie de medidas que condujeron a la más profunda depresión económica desde la segunda guerra mundial, disminuyendo así las posibilidades de exportación de los países atrasados.

La inflación y la recesión siempre castigan con mayor severidad a los pobres que a los ricos; así los mil millones de seres que viven en las naciones de ingresos más bajos son las principales víctimas de la actual turbulencia económica. Los países atrasados resintieron durante 1974 un considerable deterioro de su relación de intercambio, que redujo su capacidad para importar. Robert McNamara hizo saber que el año pasado los precios de las importaciones de los países atrasados se incrementaron 40% mientras que sus exportaciones subieron

solamente 27%, y en el presente año la inflación agregará por lo menos otro 6% al costo de los bienes importados y muy poco a sus exportaciones.

El Presidente del Banco Mundial informó que la institución a su cargo realizará una serie de medidas encaminadas a superar la crisis de capital que afecta a sus países miembros, y para ello elevará a niveles sin precedente su programa crediticio. En el ejercicio de 1975 el volumen de los nuevos compromisos financieros del Grupo del Banco Mundial aumentará a 6 000 millones de dólares, nivel muy superior en comparación a los 4 500 millones presupuestados para 1974. Además, se ha proyectado una cantidad de 7 000 millones para 1976 y un total para el quinquenio comprendido para los ejercicios 1976-1980 de alrededor de los 40 000 millones de dólares. De efectuarse estos proyectos, el monto crediticio para el próximo quinquenio representará, en términos reales, un incremento de 58% sobre el nivel del quinquenio anterior (1971-75).

Para complementar este urgente programa de asistencia financiera, el Banco Mundial establecerá un mecanismo crediticio a través del cual se facilitarán fondos a los países miembros de ingresos más bajos a un tipo de interés concesionario intermedio entre el de los préstamos del Banco y el de los créditos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF).

El nuevo programa se denominará "Tercera Ventanilla" y su finalidad será la de facilitar asistencia suplementaria para el desarrollo en condiciones adecuadas a la limitada capacidad de servicio de la deuda de estos países, y con vencimientos más largos que los ofrecidos actualmente por otros mecanismos de emergencia, como el servicio financiero del petróleo del FMI.

Aun así, McNamara reconoció que éstos son insuficientes para satisfacer plenamente las más apremiantes necesidades de estos países y advirtió que la capacidad crediticia tiene límites. En este sentido, los representantes de los países atrasados argumentaron que estos proyectos ni atenúan la actual situación ni modifican la estructura de atraso económico, sino que, por el contrario, aumentarían su impresionante endeudamiento externo y las condiciones de dependencia. Sin embargo, mientras se

discuten o se encuentran los medios para rescatar de la desolación a estas zonas marginadas, las proyecciones estadísticas pronostican que el desarrollo del sistema económico imperante en esta parte del mundo, ocasionará que los ingresos *per capita* de los mil millones de personas que habitan estos países aumentarán (a precios constantes) de 105 dólares en 1970 a 108 dólares en 1980, mientras que en el mismo lapso los ingresos de los habitantes de los países industrializados pasarán de 3 100 dólares a 4 000 dólares.

Al igual que el Presidente del Banco Mundial, el Director del FMI mostró una gran preocupación por el panorama económico mundial. Puso énfasis en advertir que si los países industrializados no llevan sus políticas económicas expansionistas en una forma coordinada y responsable que garantice una recuperación sólida y sostenida, ayudando a su vez a los demás países a aumentar sus exportaciones, se dará un auge modesto y de corta duración, que después del primer semestre de 1976 no tendrá ningún efecto significativo, y sí traerá secuelas inflacionarias.

En su discurso J. Witteveen exhortó a Estados Unidos, a la República Federal de Alemania y a Japón, países con una fuerte posición económica que han controlado relativamente su inflación interna y representan una gran proporción dentro de la economía capitalista mundial, a aplicar medidas expansionistas que no representen peligro de inflación, sin olvidar que el comportamiento de sus economías influye de manera determinante en el destino de muchos países cuyas economías están íntimamente ligadas a las suyas.

El ministro de Hacienda de la República Federal de Alemania, Hans Apel, respaldó la postura del Director del FMI y confirmó que su Gobierno continuará fomentando la demanda interna y tratará de reducir el superávit de su país en la balanza comercial y en cuenta corriente, sin reducir su nivel de importaciones para contribuir a equilibrar los pagos internacionales.

Por su parte, el Gobernador por Japón, Masayoshi Ohira, también hizo hincapié en la necesidad de prestar la debida atención a la estabilidad de los precios, a la vez que se adopten medidas para lograr una continua recuperación

económica. Considerando las perspectivas a largo plazo, el representante japonés hizo saber que de ninguna manera se puede esperar una aceleración en el ritmo de crecimiento económico como el registrado en los años de 1972-1973.

La postura de Estados Unidos respecto a las formas más adecuadas para impulsar la economía internacional fue expuesta directamente por el presidente Gerald Ford. El Primer Mandatario estadounidense sostuvo ante la Junta de Gobernadores del FMI y del Banco Mundial que tenía una amplia seguridad en la recuperación de la economía de su país, aunque ello podría ser un proceso lento. Esto, declaró Ford, es la mayor contribución que Estados Unidos puede hacer por los demás, pero cada país tiene que tomar sus propias decisiones respecto a su economía y ninguna nación debe esperar a que las demás le resuelvan sus problemas.

Así, en lugar de secundar la petición del Director General del FMI en el sentido de mantener una política expansionista regulada y disciplinada de acuerdo con condiciones mundiales, en beneficio de los demás países, los dirigentes estadounidenses solicitaron a los países productores de materias primas, en especial a los países miembros de la OPEP, que mantuvieran los precios de sus productos para no agravar más la economía mundial.

Los comentaristas internacionales calificaron la postura estadounidense de simplista y unilateral. La evolución de las relaciones económicas internacionales ha demostrado, y en estos últimos años con mayor claridad, que la situación económica de los países industrializados trasciende automáticamente a las demás naciones y las políticas aplicadas aisladamente lejos de remediar los problemas, los complican.

Cierto es que, como sostiene Estados Unidos, cada país debe de resolver sus problemas por sí mismo y con sus propios recursos, en vez de esperar que otros se los solucionen. Pero cuando su problema principal es que no puede hacer uso de sus propios recursos porque éstos le han sido secuestrados por consorcios extranjeros que cuentan con el apoyo de grandes potencias o que no puede vender sus productos a precios justos sino a los que las naciones poderosas le imponen, entonces la cuestión

de "ayudarse a sí mismo" cobra un aspecto distinto.

En cuanto a la restauración del Sistema Monetario Internacional, las controversias se acentuaron y sólo se delinearon soluciones de poca eficacia para remediar la actual anarquía monetaria. Los antagonismos quedaron manifestados con las intervenciones de los representantes de los países de la Comunidad Económica Europea (CEE), en particular el de Francia, que aboga por el restablecimiento de cierto control en el sistema de paridades, contra la posición de las autoridades estadounidenses que consideran más viable para la economía mundial los tipos de cambio flotantes.

Según el FMI, la flexibilidad en las tasas de cambio en momentos tales como el pasado reciente, parece haber permitido a la economía mundial atravesar las dificultades de los dos últimos años sin demasiadas perturbaciones monetarias o comerciales. De acuerdo con su informe, la flotación monetaria permitió acomodar las tendencias divergentes de costos y precios en las economías nacionales con menos rupturas en el comercio y los pagos, lo que hubiera sido imposible con un sistema de paridades fijas.

Entre los gobernadores que propugnaron mayores esfuerzos para mejorar la estabilidad en los tipos de cambio figuraron el de Grecia, Bélgica, Holanda e Italia. El Sr. Zolotas, representante de Grecia, manifestó que "las relaciones monetarias internacionales dan la impresión de hallarse en un estado de anarquía", y observó que el dólar estadounidense ha fluctuado siete veces con una amplitud de más del 10% durante los últimos dos años y medio, y una de las veces más de 20%. Si bien el Sr. Zolotas aceptó que el volver a adoptar las paridades fijas no puede considerarse una solución en este momento, se mostró partidario, como varios de sus colegas gobernadores, de un régimen de flotación más dirigido.

En lo que concierne al oro, se determinaron modificaciones trascendentales en la reunión conjunta del FMI y del Banco Mundial al aprobarse por unanimidad que el FMI se desprendiera de un tercio del total de sus reservas de oro.

Con el propósito de provocar la reducción gradual de la función del oro en el Sistema Monetario Internacional, el

Comité Provisional del FMI anunció las siguientes disposiciones:

1. Abolir el precio oficial del oro.
2. Eliminar la obligación de utilizar oro en transacciones con el Fondo y suprimir la facultad del Fondo para aceptar oro en transacciones, salvo si el Fondo así lo decidiera por una mayoría de 85%. Ese entendimiento no afectaría al estudio de una unidad de cuenta en sustitución del oro.

3. La venta de una sexta parte del oro del Fondo (25 millones de onzas) en beneficio de los países en desarrollo sin una consecuente reducción de otros recursos en su beneficio, y la restitución de una sexta parte del oro del Fondo a los países miembros. La proporción de los beneficios o excedente del valor del oro vendido en beneficio de los países en desarrollo que correspondiera a la participación de las cuotas de estos países se transferiría directamente a cada país en desarrollo en proporción con su cuota. El resto del oro del Fondo quedaría sujeto a las disposiciones previstas en una enmienda del Convenio Constitutivo que establecería poderes de disposición que se podrán ejercer mediante una mayoría del 85% de la totalidad de los votos.

Por otro lado, los países del Grupo de los Diez (Estados Unidos, Francia, Alemania Federal, Gran Bretaña, Italia, Bélgica, Holanda, Suecia, Canadá y Japón), a los que se une, como es tradicional, Suiza, tomaron la muy importante decisión de abolir las reglas de Bretton Woods que prohíben hacer operaciones de compraventa de oro al precio del mercado libre.

El Comité Provisional del FMI dispuso que con la venta de la sexta parte de sus reservas de oro se creara un fondo fiduciario para respaldar la balanza de pagos de los países de menor desarrollo, cuando por condiciones adversas disminuyan el volumen y valor de sus exportaciones y se incrementen las importaciones.

Sin embargo, quienes se hagan beneficiarios de este fondo tendrán que demostrar que la situación económica que les es adversa no ha sido culpa de ellos, por negligencia o por lo que sea, y que -al contrario- se encuentran sujetos al continuo desequilibrio que se presenta

en todas las transacciones de orden internacional.

Según informes del FMI, aún no se han enunciado las condiciones mediante las cuales se ejecutará esta masiva venta de oro, pero se aseguró que no se llevaría a cabo hasta el próximo año y que la subasta se realizaría paulatinamente a fin de no abatir el precio del metal.

Otro de los aspectos importantes discutidos en la Reunión de Washington fue la distribución de las cuotas-parte de los países miembros del FMI. Después de un amplio debate, Estados Unidos y otras naciones industrializadas aceptaron reducir ligeramente sus cuotas-partes para otorgar una mayor participación a los países productores y exportadores de petróleo, quienes elevaron su poder de voto del 5 al 10 por ciento, llegando el Tercer Mundo en su conjunto a disponer de 31% del total de votos.

Aun así, Estados Unidos continuará conservando su alto poder de voto sobre las decisiones importantes del FMI, ya que también se acordó que para tener el consenso ejecutivo se requiere del 85% del voto aprobatorio en lugar del 80%, y como la cuota de Estados Unidos se fijó en 20.8%, su palabra seguirá siendo definitiva. Todos los arreglos del oro y las cuotas-partes están sujetas a cambios y su confirmación será dada en la Reunión de Jamaica, el próximo mes de enero.

En términos generales, la atención del FMI se dirigió más hacia los problemas de la economía mundial que a los monetarios, dejando para ulteriores reuniones los problemas básicos para reestructurar el sistema monetario. En estas condiciones no es exagerado hablar de un verdadero ocaso del papel de regulador monetario del FMI. A partir de ahora, esta institución va tomando más el carácter de un banco internacional, cediendo créditos a largo y mediano plazo a los países atrasados. La creación del fondo fiduciario es una confirmación de esa evolución.

La reunión de Rambouillet

Las grandes distorsiones económicas sufridas por el mundo capitalista en los dos últimos años han provocado la recesión económica más fuerte de la posguerra, con un desempleo que supera a los 15 millones de trabajadores en 24 países

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que significa un peligro para el sostenimiento de las instituciones políticas y sociales de los mismos. Este parece ser el motivo por el que las altas autoridades de las naciones más poderosas decidieron reunirse para examinar qué política deben aplicar para salir de la recesión.

Ante tales circunstancias y con el propósito de restablecer la confianza entre los países industriales, coordinar sus estrategias de recuperación económica y sobre todo disminuir sus divergencias de opinión para dar la imagen de una mayor cohesión, el presidente de Estados Unidos, Gerald Ford; el canciller de la República Federal Alemana, Helmut Schmidt; y los primeros ministros de Japón, Inglaterra e Italia, Takeo Miki, Harold Wilson y Aldo Moro, respectivamente, estuvieron en la ciudad de París los días 15, 16 y 17 de noviembre, en una reunión cumbre convocada por el presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing.

Esta es la primera ocasión, desde la reunión económica efectuada en junio de 1933 en Londres, que se celebra una entrevista de esta naturaleza. En aquel tiempo las mayores potencias capitalistas estaban sufriendo las consecuencias de la gran depresión y se reconocía la urgente necesidad de que Estados Unidos, por su alta capacidad productiva, empujara a los demás países hacia el camino de la recuperación económica. Sin embargo, en opinión de los expertos en materia económica, este bloque de países, los cuales elaboran las dos terceras partes de la producción industrial del mundo capitalista, carecen en la actualidad de un líder fuerte y buscan desesperadamente los medios que los conduzcan a la estabilidad económica, ya que los mecanismos tradicionales, como el sistema monetario internacional surgido del acuerdo de Bretton Woods, no responden a las necesidades presentes.

Los seis países tienen plena conciencia de los graves problemas que encaran, y que deben buscar un crecimiento económico sostenido sin incurrir en medidas inflacionarias, ya que de lo contrario la recuperación sería modesta, el ciclo de auge-recesión se estrecharía y pronto se presentaría otra crisis económica de mayores magnitudes. Durante estos últimos meses del año se han advertido ciertos

síntomas de reanimación económica, pero aún la situación es crítica pues el repunte de la economía mundial no es muy consistente.

La economía de Estados Unidos mostró en el tercer trimestre de 1975 cifras alentadoras, pero no es seguro que se mantengan; el crecimiento fue de 11.2%, pero debido más a una disminución de los inventarios de la industria que a un aumento de las ventas finales. Esta mejoría económica difícilmente se reflejará en el resto del mundo, pues la balanza de pagos ha tenido saldos positivos en todo el año. Además, aunque la tasa de desempleo ha disminuido, siguió mostrando un pequeño incremento en septiembre al situarse en 8.6%. La tasa de inflación continúa en un alto nivel y preocupa tanto en Estados Unidos como en Europa que no se haya encontrado todavía un camino para solucionar de una manera firme la crisis financiera de la ciudad de Nueva York.

En lo que respecta a la economía de la República Federal de Alemania, se estima que su crecimiento será entre 4 y 5 por ciento en el presente año. Sus autoridades esperan que la inflación actual, 6.1% anual, una de las más bajas entre los países de la OCDE, se reduzca a 4 o 5 por ciento para el siguiente año. Su índice de desempleo alcanzó el nivel más alto en 16 años en el primer semestre de 1975, con una tasa de 5.2%, pero se calcula que al finalizar el año bajará a 4.6%. El Comité de Consejeros en Asuntos Económicos del Gobierno ha dicho que la mejoría depende en gran medida de las posibilidades de recuperación económica de Estados Unidos y Japón, y asegura que su país ya ha hecho el mayor esfuerzo para lograr una reactivación económica mundial, y no puede acceder a las constantes demandas de estimular aún más su economía.

En lo que toca a Japón, su primer ministro Takeo Miki señaló que la economía está trabajando a un nivel de apenas 75% de su capacidad productiva.

Al iniciarse la crisis del petróleo en 1974, Japón resintió, más que ningún otro país, un fuerte descenso de la producción industrial, pero ha sabido recuperarse con rapidez. Desde febrero de 1975 la producción ha aumentado y en los siguientes seis meses el incremento medio anual fue de 15%. El desempleo es bajo gracias a su sistema de contratos;

su tasa de inflación, de más de 20% el año anterior, se piensa se reducirá a menos de 10% para el presente año. Empero, el mayor problema es la fuerte caída del comercio exterior, ya que las exportaciones contribuyen en buena medida al sostenimiento de la economía japonesa.

Es importante hacer notar que estos tres países, Estados Unidos, República Federal Alemana y Japón, tendrán elecciones gubernamentales el año próximo, por lo que el éxito o fracaso de las políticas económicas tiene gran significado político.

Sin lugar a dudas Italia e Inglaterra han sido los países más castigados por la contracción económica mundial del presente año. El primer ministro de Italia, Aldo Moro, anunció que su industria se encuentra trabajando al 68% de su capacidad y que en 1975 el producto nacional descenderá 3.5%. Aunque en Italia el desempleo no es un buen indicador, cabe decir que de 2.9% en 1974 se elevará a 3.5% en 1975. Su déficit en cuenta corriente permanece en niveles altos. Todo este malestar económico ha exacerbado el clima político del país, restándole constantemente fuerzas al Partido Demócrata Cristiano, en el poder, en favor del Partido Comunista Italiano, que ha logrado triunfos electorales en un buen número de provincias.

Inglaterra registra una inflación de 26.9% anual, la más alta del mundo industrializado; el número de desocupados es de 1.2 millones y el déficit presupuestal se remonta a los 20 000 millones de dólares, y donde dichas cifras tienden a aumentar. Las inversiones se han retraído considerablemente, con excepción de las petroleras en el mar del norte, acusando una caída de 11.3% durante el primer semestre de 1975; el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se estima que ascenderá a 4 000 millones de dólares. La posición económica de Inglaterra es alarmante y representa una gran preocupación tanto para sus gobernantes como para el resto de los países industrializados.

Por su parte, Francia ha tenido una baja constante en su producción industrial desde mediados de 1974. El desempleo suma casi un millón y medio de trabajadores de una fuerza laboral de 22 millones. La inflación no ha cedido, y continúa a una tasa de entre 10 y 12

por ciento anual; la balanza de pagos muestra un equilibrio endeble y en septiembre presentó números negativos, por lo que el Gobierno realizará mayores esfuerzos por reducir sus importaciones de petróleo. Aun así, las autoridades francesas se muestran optimistas y afirman que lo peor de la recesión económica ya pasó y que en 1976 se dará un alza en todos los renglones de las actividades productivas.

Con tales antecedentes, el ánimo de la reunión de París fue el de dar directrices o indicaciones que se puedan reflejar en las acciones de los gobiernos convocados, destacando la enorme dificultad de tomar decisiones definitivas o trascendentales en esa junta informal. Al finalizar la entrevista se elaboró un comunicado que se denominó "Manifiesto de Rambouillet", en el cual destacan los principales temas analizados en la reunión.

A cada uno de los jefes de Estado le correspondió dirigir la discusión de uno de los distintos tópicos tratados en la reunión: Schmidt las políticas de recuperación económica; Ford el problema de los energéticos; Giscard d'Estaing las relaciones monetarias internacionales; Miki el comercio mundial; Wilson las relaciones económicas con los países menos desarrollados, y Moro las relaciones de los países capitalistas avanzados con los países de economía socialista.

Los primeros seis puntos del manifiesto estuvieron dedicados íntegramente a los problemas de la situación económica mundial y a los planes generales para resolverlos. Las seis potencias aceptaron compartir responsabilidades y buscar la forma de lograr un mayor crecimiento económico en sus naciones y con ello ayudar a los demás países a obtener su recuperación. Afirmaron que el propósito primordial de su entrevista fue el identificar los problemas que afectan a sus economías para combatirlos decididamente y garantizar una prosperidad constante para el futuro. Por consiguiente, la consigna general del manifiesto fue la de asegurar una recuperación sólida de sus economías y reducir el enorme desperdicio de recursos humanos provocado por el desempleo, evitando lo más posible el uso de medidas inflacionarias innecesarias, para poder restaurar la confianza entre sus pueblos.

Estos buenos descos se expresaron en

abstracto y de hecho sobre la base de que cada quien aplicaría las medidas más convenientes para sí, con lo que estaría ayudando a los demás. Esto quiere decir que tanto Alemania como Estados Unidos continuarán sin producir estímulos adicionales en sus economías, a pesar de que la recuperación se retrase.

Para Francia, el problema más importante que debería de resolverse era el de la estabilidad de la relación de paridades entre las monedas más fuertes. En la reunión conjunta de gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial celebrada el pasado mes de septiembre en la ciudad de Washington, Francia expuso en forma contundente la urgencia de aplicar algún tipo de medidas que den cierta estabilidad a la paridad de las monedas, como las que rigen dentro de lo que se llama la serpiente monetaria europea, mecanismo de acuerdo con el cual las monedas de Francia, República Federal Alemana, Suiza, Dinamarca y los países del Benelux, oscilan bajo reglas previamente aceptadas. Empero, los deseos de Francia se enfrentaron a la rotunda negativa de Estados Unidos, que hizo saber que no ajustaría su signo monetario a ninguna reglamentación que fuera en contra de las leyes del mercado.

A juicio de los observadores, la insistencia de Estados Unidos en defender el libre derecho de la fluctuación de paridades, se debe a las grandes ventajas que su economía ha obtenido de esa fluctuación y que constituye una magnífica defensa para evitar un reconocimiento oficial de nuevas devaluaciones del dólar. Además de esta ventaja inmediata, en Washington también se opina que el dólar es y será, en un futuro previsible, una moneda de reserva cuya defensa, en período de crisis, es extremadamente difícil y costosa en un sistema de paridades fijas o relativamente fijas.

Como era de esperarse, la postura de Estados Unidos fue la predominante. Cinco días antes de la reunión de Rambouillet el presidente Giscard D'Estaing hizo las siguientes declaraciones al conocido periódico francés, *Le Figaro*: "Bajo las presentes circunstancias no es oportuno reabrir un debate doctrinal sobre el problema de las paridades y por el momento es difícil pensar en una reforma en el sistema monetario, pero sí es necesario buscar un mínimo de estabilización". Con estas afirmaciones, el Presi-

dente francés dejaba entrever un cambio en sus posiciones y que su país ya no defendería a ultranza el establecimiento de una paridad reglamentada en los tipos de cambio.

En efecto, el único párrafo dedicado a los asuntos monetarios del manifiesto de Rambouillet no especifica nada acerca de algún convenio formal y sólo se limita a informar que las autoridades monetarias de los seis países actuarán cuando las circunstancias lo ameriten para controlar condiciones de desorden mundial o enderezar fluctuaciones exageradas. Así, con el supuesto compromiso de coordinar las acciones de los bancos centrales, en un "acuerdo de caballeros", Francia llegó a una especie de armisticio con Estados Unidos y se conformó con la esperanza de que las fluctuaciones del dólar sean menores de 10%, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos meses. Este arreglo tácito al anterior problema monetario, facilitará la tarea del FMI, uno de cuyos comités sesionará en Jamaica en enero de 1976, para discutir sobre los movimientos de las paridades y otros asuntos monetarios.

Otro de los puntos importantes del manifiesto de Rambouillet es el referente al comercio internacional. Dado que la economía de estos países industriales descansa en buena medida en sus relaciones comerciales con el exterior, la fluidez del comercio mundial constituye una de las mayores preocupaciones para sus dirigentes. En 1974 el total de las exportaciones representó el 7% del producto nacional bruto de Estados Unidos, el 12.3% del de Japón y el 23.2% del de la República Federal de Alemania.

Entre 1962-1972, la economía del mundo capitalista creció a una tasa promedio de 5%, mientras que el comercio mundial mostró un crecimiento de 7.9% para el mismo período. En 1973 el volumen del comercio mundial aumentó 14%, es decir, más del doble del incremento de la economía mundial que fue del 6.3%. Para 1974, cuando la economía del mundo capitalista comenzó a penetrar en un período de recesión, con un crecimiento entre 1 y 3 por ciento, el comercio mundial continuó expandiéndose a una tasa del 6%. Empero, los efectos de la recesión económica se han hecho sentir en 1975, en el que según estimaciones del FMI, con base en datos proporcionados por el GATT, el comercio mundial se redujo 10% durante los

primeros seis meses del año, con relación al mismo período del año anterior.

Ante la declinación del comercio mundial; los representantes de las seis naciones acordaron abolir hasta el máximo las restricciones comerciales y aseguraron que no habrá ninguna posibilidad de confrontación comercial entre ellos. Es importante, se afirmó en la reunión, que las naciones con altos superávit o con déficit desorbitados reafirmen su apego a los principios comerciales del Tratado de la OCDE e impulsen todos los mecanismos necesarios para equilibrar sus transacciones comerciales. Se fijaron como meta que las negociaciones del Acuerdo de Tokio sobre liberación comercial alcancen sus últimas etapas al finalizar 1977.

En materia energética, la declaración reafirma la necesidad de cooperación en la investigación y desarrollo de otras fuentes de energía a fin de que los seis países reduzcan su enorme dependencia de los productores de petróleo. En este sentido, el presidente Gerald Ford ofreció que se exportará sin ningún obstáculo cualquier tecnología desarrollada en Estados Unidos que proporcione una nueva forma de energía.

Hubo ciertas discrepancias cuando se intentó formular algunas soluciones al problema de la energía. Por ello se pospuso cualquier decisión para la próxima conferencia sobre materias primas y energéticos que se celebrará en París el 16 de diciembre de 1975.

A juicio de los politólogos y expertos en asuntos económicos, la reunión de los seis dirigentes de las potencias industriales no significó un gran adelanto para la resolución de los graves problemas económicos, políticos y sociales a que se enfrenta el mundo capitalista. El "espíritu de Rambouillet" como lo calificó el presidente de Francia, pretendió dar la idea de una relación armoniosa entre sus políticas de recuperación, pero en realidad no alcanzó a establecer ningún acuerdo concreto. No se precisó la manera de evitar otra espiral inflacionaria, no se delimitaron márgenes de variación en el valor de las monedas, no se adoptó ninguna política sobre el manejo de las tasas de interés y no se llegó a ningún acuerdo sobre los problemas de energéticos.

Aun así, todos los participantes se

dijeron satisfechos y se conformaron con enunciar un alud de buenos deseos mediante un manifiesto elaborado con un tono retórico como el que critican al Tercer Mundo, señalando que el crecimiento y la estabilidad de sus economías se traduciría en prosperidad para las demás naciones, o en otros términos que lo que es provechoso para ellos, necesariamente será provechoso para los demás.

OPEP: fondo de ayuda para el Tercer Mundo

Los ministros de Finanzas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordaron el 18 de noviembre, en Viena, la creación de un fondo de ayuda para los países del Tercer Mundo. La reunión de los productores de petróleo, prevista para dos días de duración, finalizó después de unas cuantas horas de conferenciar a puerta cerrada, tiempo suficiente para que la OPEP acordara por unanimidad ayudar a los países del Tercer Mundo con un fondo de mil millones de dólares durante 1976. Trascendió que se evitó crear una estructura administrativa para operar el fondo.

Aunque la prensa no ha publicado el texto del acuerdo o resolución oficial por parte de la OPEP es visible que el instrumento comentado se basa en las propuestas de ayuda planteadas por Irán y Venezuela en el curso de la conferencia realizada en Viena en septiembre pasado. La iniciativa de los dos estados productores era más ambiciosa: proponían un impuesto de diez centavos de dólar en cada barril de crudo, cifra que a pesar de ser inferior al 1% del nuevo precio de referencia de 11.51 dólares de barril, posibilitaría reunir una cantidad de 500 a 600 millones de dólares el primer año, pero que llegaría a 5 000 millones de dólares después de cinco años.

Un experto en cuestiones petroleras describió a fines de noviembre las particularidades del programa de ayuda de la OPEP como "un fondo para otorgar préstamos sin interés a los países en desarrollo que han resentido efectos negativos en sus balanzas de pagos por el alza de los precios de exportación del petróleo y también para financiar programas de desarrollo de esos países".

Añadió que "el fondo será adminis-

trado directamente por la Organización, de manera que exista la seguridad de que los recursos a él asignados se utilicen de acuerdo con los criterios de la propia OPEP".

Empero, el mismo analista opina que el fondo de ayuda tiene varios aspectos negativos:

- Utiliza la ayuda como un instrumento de control político regional, lo cual está más acorde con las prácticas de los países desarrollados, no con las declaraciones de solidaridad entre la OPEP y el Tercer Mundo.

- El fondo es inferior al desembolso adicional de los países tercermundistas causado por el último aumento en los precios del crudo (de 1 500 a 2 000 millones de dólares).

- Al no deslindarse los propósitos de compensación de la balanza de pagos de los de ayuda al desarrollo, se ignora que es conveniente atender por separado ambas necesidades.

Afirma el analista que "una cosa es eximir a los países en desarrollo importadores de petróleo del efecto que el aumento reciente de los precios del crudo ejerce sobre sus balanzas de pagos y otra es atender a las necesidades de financiamiento de proyectos de desarrollo del Tercer Mundo.

"Lo primero requiere la devolución automática e incondicional de sus desembolsos adicionales. Lo segundo exige créditos concesionales administrados con criterios nuevos y libres de lazos políticos y económicos".

No obstante lo anterior, nuestro experto reconoce tres aspectos del todo valiosos en las medidas anunciadas por la OPEP:

- Es la primera manifestación colectiva de la voluntad de la OPEP para cooperar con el Tercer Mundo.

- Representa una oportunidad principal para que los países del Tercer Mundo pongan en práctica una redistribución masiva de los recursos financieros sin la distorsionadora participación de los países desarrollados.

Todos los miembros del organismo contribuirán al fondo de ayuda de acuer-

do con una escala cuyos detalles se desconocen. Las decisiones adoptadas aún no han sido ratificadas por los gobiernos de los países miembros del organismo, aunque el ministro de Irán, Jamshid Amouzegar, manifestó su confianza en el apoyo de los mismos.

Cabe subrayar que la adopción del fondo de ayuda representa un éxito para Irán, país que junto con Venezuela ha puesto el acento en la necesidad de estrechar la cohesión de los productores de crudo con el resto del mundo en desarrollo para formar un baluarte frente a las potencias industriales en la conferencia de París programada para diciembre próximo.

A pesar de la brevedad de la reunión reseñada, pudo advertirse la persistencia de las actitudes opuestas de varios productores árabes quienes, siguiendo a Arabia Saudita, se mostraron proclives a la concertación de acuerdos bilaterales o a la participación en proyectos conjuntos con el Tercer Mundo más que a establecer un fondo de ayuda para el mismo.

Dentro de ese contexto la participación de los países exportadores de petróleo es considerable. De acuerdo con el informe del Banco Mundial para 1975, "según la información disponible los compromisos totales de los miembros de la OPEP aumentaron de 3 000 millones de dólares en 1973 a 16 000 millones en 1974. El volumen de los desembolsos anunciados aumentó a un ritmo igualmente rápido, pasando de unos 1 000 millones de dólares a 5 000 millones. Estas cifras comprenden tanto los recursos en condiciones concesionarias como los facilitados en otras condiciones. En 1974 aproximadamente el 40% de esos desembolsos correspondió al primer grupo. Entre los desembolsos en condiciones no concesionarias se incluyeron préstamos al Banco Mundial (1 460 millones de dólares) y al servicio del petróleo del Fondo Monetario Internacional (1 220 millones de dólares, la parte de los fondos de dicho servicio que se prestó a los países en desarrollo)".

"El financiamiento para fines de desarrollo suministrado por los países exportadores de petróleo a través de los mercados de emisiones extranjeras e internacionales de bonos ascendió a 2 451 millones de dólares en 1974, de los cuales el equivalente de 2 251 millones se facilitó en préstamo al Banco Mundial."